

Elena Hernández Sandoica

La crisis de la universidad

En una tardía asunción de la profundidad y complejidad de la crisis, ni la política ni la sociedad parecen abordar con energía los problemas estructurales de la universidad española, leídos otra vez en clave de coyuntura.¹ Sin embargo, y sin que sea obligado aceptar de entrada el penoso lugar que las universidades españolas alcanzan en los *rankings* internacionales,² es general la sensación de decadencia en la educación superior, una percepción mezclada con la tendencia a quejarse propia del mundo universitario y con un preocupante rechazo a los cambios. El malestar avanza desde el otoño de 2008, sin que el último cambio ministerial (7 de abril de 2009) lo haya desvanecido por ahora. Los modestos intentos del gobierno de frenar el descontento, con el anuncio de medidas más retóricas que con capacidad de materialización, son gestos inherentes al combate político, ingenuos o livianos, y al margen de la depresión estructural. Desde finales del 2008 esas medidas aparecen ligadas de modo explícito al reajuste económico y al cambio de modelo productivo. Pero, por mucho que una apuesta fuerte por el I+D+i sea en España una absoluta necesidad, hay muchas cosas, concretas y específicas, que siguen necesitadas de atención en la educación superior, seguramente en mayor medida que en otros países de la Unión Europea.

Bien cierto es que no todo son sombras. En los últimos treinta años se ha producido en España una importante democratización social de la formación superior, impulsada por la proliferación de universidades en el marco de las autonomías —un modelo «de proximidad» extrema, más propiamente que de descentralización—. Esto es, en sí mismo, un

1 Mientras reelaboro este texto (principios de junio de 2009), ha tomado cuerpo una iniciativa interesante como es la de la Asociación de personal de la Universidad Politécnica de Cataluña (UpiC), *Construir el futuro de la Universidad Pública. Jornada de reflexión y debate* <www.jornadauniversidadpublica.org>.

2 Un reciente estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (resumen en *El País*, 25-V-2009, p. 32) insiste en la debilidad general del sistema, tanto en docencia como en investigación.

hecho incuestionablemente positivo, porque el acceso a la universidad ya no discrimina en España como en otras partes, y la obtención de un título académico ya no obedece sólo a estrategias de elite. Si la media de titulados universitarios ha crecido como lo ha hecho, se debe a que, sin abandonar el hogar paterno y a un bajo coste personal, muchos estudiantes han podido prescindir de becas y ayudas, acogiéndose a precios relativamente bajos de matrícula y reduciendo el coste de los estudios fuera del hogar familiar: mientras la media porcentual de estudiantes universitarios en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) está en torno a un 25%, España tiene un 26%. Pero medir el rendimiento y la calidad de los títulos, en cambio, no ha sido algo que preocupara realmente hasta aquí. Además, los empresarios van prefiriendo contratar no universitarios para empleos que éstos venían cubriendo antes de la crisis por debajo de su titulación.³ Y, finalmente, apunta un horizonte negativo desde el punto de la equiparación, porque los hijos de inmigrantes no están llegando aún a la enseñanza superior. Si bien los modelos educativos se muestran desfasados, no está del todo clara cuál sea la apuesta real, de los políticos y las autoridades académicas, por su transformación. Mientras, el proceso de *convergencia* sigue adelante, en dirección al 2010.

Convergencia europea y movilización estudiantil

España es de momento un país con un índice de malestar social inusitadamente bajo, y por ello han sido los estudiantes, en estos meses, un excepcional foco de protesta. Se alzaron ante las medidas que prometen homologar sus títulos con los europeos, con encierros en los rectorados y hasta afrontando la expulsión de la universidad (como ocurrió en Barcelona), salpicando las calles con pintadas y reabriendo viejas consignas que hoy recubren una muy distinta protesta política y social.⁴ Grecia primero, Francia e Italia con gran complejidad, exhiben también muestras de colapso, quizá más graves que las españolas, pero

3 Es aún bajo el paro entre los titulados en Formación Profesional: 5%. (*El Mundo*, 25-II-2009, «Campus» 542, 1, resumiendo un estudio de la Fundación Universidad-Empresa); *El País*, 12-IV-2009, p. 30.

4 La curva de las movilizaciones en Madrid, vino a coincidir con el 40º aniversario del asesinato del estudiante Enrique Ruano a manos de la policía franquista. La Universidad Complutense de Madrid (UCM), desde el Rectorado, organizó un homenaje oficial (*Público*, 21-I-2009, 25).

que en ningún caso justificarían la trivialización. En España, las movilizaciones estudiantiles empezaron en el otoño de 2008,⁵ se expandieron a fines de noviembre y atravesaron Navidad sin diluirse.⁶ El cénit llegó en primavera, escenario de choques con la policía autonómica en Cataluña, y con la entrada en escena de los medios de comunicación.⁷ Ahí se vio que los discursos anti-globalización no siempre eran lo primero ni lo principal en el caso de los estudiantes españoles, aunque ese ingrediente esté presente en su protesta, igual que lo está en el rechazo de cuantos intelectuales y profesores, no muchos, se han manifesta-

-
- 5 Estudiantes anti-Bolonia habían aparecido el 4 de marzo en Barcelona, pero la presión sólo se expandió a principios de noviembre de 2008, con alta participación en Valencia en vísperas de las elecciones estudiantiles; luego en Madrid y, de nuevo, en Barcelona, interrumpiendo consejos de gobierno y reuniones académicas al tiempo que se publicaban las sanciones a los estudiantes movilizados en la primavera. Hubo incluso cortes de tráfico ferroviario. Entre tanto, el 6 de diciembre, moría en Atenas a manos de la policía un chico de quince años. El eco de la protesta griega se dejó oír en Italia, Alemania, Francia, España y Dinamarca, orientándose definitivamente contra *Bolonia*, lo que a algunos pareció un nuevo «Mayo del 68» cuarenta años después. Amplificada por Internet, vehículo de redes anti-globalización, la movilización, sin ser masiva, se hizo endémica. Desde el 14 de noviembre salieron a la calle miles de estudiantes en diversas ciudades españolas y se encerraron en pequeños grupos en los rectorados. En el de la UCM estuvieron del 10 de diciembre hasta la vuelta de Navidad. Las movilizaciones posteriores no lograron ya la paralización académica ni fueron violentas, y se centraron en facultades como Filosofía (la más combativa, y que aún mantiene una plataforma en la web), Filología y Políticas. Otras universidades (las dos de Barcelona, las de Valencia, Sevilla, etc.), en momentos variados, mantuvieron la tensión (cf. resúmenes en *El País*, 12-XII-2008, 1-5 y 22-XII-2008, 26-27).
- 6 En vista de lo cual los cinco rectores de las universidades más afectadas pidieron «una campaña de difusión similar a la del euro». A través del Consejo de Universidades, aseguraron que «la dimensión social y humanística de la universidad es parte integrante del proceso de construcción del nuevo espacio común, al igual que lo es el compromiso con una educación superior de la mayor calidad, igualmente accesible para todos». Condenaban, de paso, «las acciones violentas y las actitudes de aquéllos que pretenden ignorar los mecanismos democráticos que legítimamente rigen el funcionamiento de las instituciones universitarias» (*El País*, 4-XII-2008, 36, recogiendo entrevista de la ministra Garmendia con los rectores).
- 7 El 19 de marzo fueron desalojados por la fuerza del rectorado de la Universidad de Barcelona (UB), donde llevaban cuatro meses, produciéndose disturbios, con unos mil manifestantes en las calles. El 26 volvían a protestar en la ciudad, esta vez pacíficamente, unos 5.000 estudiantes, en protesta por la violencia de la policía autonómica una semana antes. La polémica en los medios, efímera, se debió a la agresión a un periodista por parte de la policía. En el resto de las universidades públicas españolas, la movilización fue menor, pocas veces no pacífica.

do públicamente a favor de «otro» modelo de universidad —no el que tenemos, pero tampoco el que se avecina—,⁸ deplorando el exceso de burocracia administrativa y los costes de orden cultural. Con todo, no abundan las alternativas ofrecidas ni son muchas las propuestas concretas de reforma.

Según los propios estudiantes, el movimiento que han tratado de extender no es «antieuropeo» ni, en general, contrario a la denominación y contenidos de nuevas titulaciones, hasta aquí inusuales o impensables, que han nacido al calor de la sacudida normativa.⁹ Además de a la «mercantilización» y subordinación de los intereses científicos a los empresariales (una idea expresamente contenida en el borrador de una nueva Ley de la Ciencia, aún no discutida en el parlamento), y al consecuente deterioro de la consideración social de las humanidades, los estudiantes se oponen también a la implantación de mecánicas de aprendizaje y procedimientos de enseñanza que, tal como se les han transmitido, unas veces consideran banales, y otras ven como limitadores de su derecho a organizar su vida y estudios (por impedirles compatibilizar). De hecho, en las carreras menos exigentes muchos estudiantes hacen trabajos ocasionales, o incluso fijos, que dan lugar a un índice de absentismo escolar superior a lo deseable para obtener una formación suficiente y homogénea. Algún «técnico» de la reforma universitaria, como Michavila,¹⁰ salió al paso de aquel temor asegurando

8 Por ejemplo, Carlos Fernández Liria, profesor de Filosofía en la UCM, en *Público*, 2-XII-2008, 29, «La estafa de Bolonia»: «Una vez que se ha dado por inevitable un mercado laboral basura, se pide flexibilidad a la enseñanza superior para crear una universidad basura. Mientras tanto, las universidades privadas ya se encargarán de formar a precio de oro las elites profesionales del mundo empresarial».

9 207 títulos «europeos» de grado (es decir, acomodados a las exigencias y requisitos convergentes) estaban ya listos para el curso 2009-2010 en febrero: Cine y televisión, Ingeniería de sistemas informáticos o Diseño de moda entre ellos. En el marco que ahora comienza a desaparecer sólo había 140 titulaciones de licenciatura. En febrero de 2006, el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) —antes de la sustitución de San Segundo por Cabrera— había sugerido aprobar sólo 79 títulos de grado, pero de inmediato se decidió renunciar al «catálogo de titulaciones», considerado restrictivo en exceso por los rectores, dejando vía libre a las universidades para que presentaran a aprobación de sus respectivas Comunidades Autónomas sus propuestas de grado, previa «acreditación» por parte de la Agencia de calidad nacional, o, en su caso, las diversas agencias locales.

10 Francisco Michavila, *Público*, 2-XII-2008, 28 («La Historia no se detiene»). Catedrático en la Universidad Politécnica de Madrid, ha tenido un papel destacado en la preparación oficial de estudios para la reforma.

que «los sistemas de enseñanza presenciales, virtuales o semipresenciales» harán que «cada ciudadano pueda elegir a la carta». Reconociendo la necesidad de conceder más becas, echaba de menos en los políticos «este tipo de pedagogía explicativa».

Y ciertamente, bien pocas explicaciones claras han sido ofrecidas a la sociedad. En la fase primera del proceso de convergencia, hasta 2004 (cuando la política universitaria pasó al PSOE desde el PP), el Ministerio de Educación y Ciencia, con la profesora María Jesús San Segundo, se demoró interiorizando el concepto de «crédito ECTS» y regulando el «suplemento al título», garantía informática que encierra la relación de los estudios cursados y permite a los estudiantes poner en valor su título en Europa de manera automática.¹¹ Pero a partir de ahí, las declaraciones anti-Bolonia evidencian, casi sin excepción, el desconocimiento de la trayectoria seguida por el ministerio —en un extremo ir y venir de cambios de titularidad y de cargos ministeriales, ante una cadena de irresponsables reticencias del Consejo de Universidades—. Sin olvidar lo que es quizá más grave: una preocupante incomprensión de las estructuras político-administrativas que nos rigen y de cuál es el uso que de ellas ha ido haciéndose desde la aprobación de la Constitución. Ni rectores, consejeros de educación, directores generales o el propio gabinete se han ocupado en realidad de deshacer los muchos malentendidos existentes a propósito de qué corresponde ejecutar o discutir a cada cual. A mediados de febrero de 2008, cuando se percibía ya el retraso de la mayoría de las universidades públicas (las grandes sobre todo) ante las privadas, que habían agilizado la salida al mercado (con posgrados primero y, en cuanto lo permitió la normativa, grados también), otra ministra, Mercedes Cabrera, declaraba: «Un aluvión de titulaciones probablemente nos hubiera sorprendido. Se trata de un proceso en el que cada uno se incorpora en el momento en que lo considera más oportuno» (*El País*,

11 Todavía hoy, la UCM insiste en este punto al divulgar entre sus estudiantes las ventajas del proceso europeo. Así *Tribuna Complutense*, 24-III-2009, «Bolonia significa [...] la implantación de un Suplemento Europeo al Título, que es un documento oficial con la información unificada y personalizada para cada titulado universitario sobre los estudios que ha cursado, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales adquiridas y el nivel de su titulación en el sistema nacional de educación superior. Bolonia significa la adopción de un Sistema de Créditos de Transferencia y Acumulación (ECTS por sus siglas en inglés), y significa la movilidad de los estudiantes».

20-II-2008, 48). Así está siendo. Y esa libertad y falta de regulación originan la situación actual.

Lo cierto es que bajo la etiqueta de «Bolonia» se están aplicando en España cambios no exigidos por el Espacio Europeo de Educación Superior, ya que éste sólo obliga a fomentar la movilidad estudiantil, a establecer una estructura de los estudios en tres ciclos y a arbitrar un sistema de estudio activo, que combine el esfuerzo del profesor con el trabajo personal del estudiante. No todos los cambios emprendidos tienen que ver con estos tres supuestos —que vistos así en junto, parecen razonables—, y ni siquiera se corresponden siempre con análisis ciertos de los cambios socioprofesionales en la actualidad.¹² Los que opinan dan cuenta así de un malestar compartido y difuso, casi consustancial al universitario, que empaña la satisfacción que deberíamos sentir por la segura modernización científica de la universidad española, en el plano de la investigación, conseguida en las últimas décadas.¹³ Con unos recursos que, en las universidades españolas continúan siendo muy escasos comparativamente, navegan en la inseguridad y comportamientos diferentes que la transferencia de competencias educativas a las Comunidades Autónomas ha ocasionado, se imponen sobre estructuras académicas clonadas y sin equilibrar, en las que siguen prevaleciendo corruptelas, la dedicación de los universitarios a la investigación ha crecido sustancialmente, y la cultura de la evaluación —plagada de dificultades ciertamente— progresan indudablemente. Pero, dependientes como son en gran medida las universidades públicas españolas de la financiación de cada Comunidad respectiva, la libera-

12 Sobre la manida invocación del término «sociedad del conocimiento» decía José Luis Pardo: «Este sintagma, casi convertido en una marca publicitaria que designa el puerto en el que han de desembarcar las actuales reformas, esconde en su interior [...] la sustitución de los contenidos cognoscitivos por sus contenedores, ya que se confunde —en un ejercicio de papanatismo sin par— la instalación de dispositivos tecnológicos de informática aplicada en todas las instituciones educativas con el progreso mismo de la ciencia, como si los ordenadores generasen espontáneamente sabiduría, y no fuesen perfectamente compatibles con la estupidez, la falsedad y la mendacidad» («La descomposición de la Universidad», *El País*, 10-XI-2008).

13 Quizá sorprenda que el órgano oficial de una universidad pública, *Tribuna Complutense*, recoja lamentos así: «No me explico cómo la sociedad actual aún no se ha planteado si de verdad sirve para algo mantener abierta la Universidad (o lo que queda de ella)». El firmante es profesor de Álgebra de la UCM (24-III-2009, 3).

lización de los mercados permite avanzar con rapidez a las privadas, de ideario confesional mayoritario y baja calidad (Hernández Sandoica 2008: 101-136). Un recorrido en el que la jerarquía de responsabilidades va de arriba abajo en la escala de actuaciones:¹⁴

Todos los que trabajamos en ella sabemos que la universidad española necesita urgentemente una reforma que ataque sus muchos males, pero no es eso lo que ahora estamos haciendo, entre otras cosas porque nadie se ha molestado en hacer de ellos un verdadero diagnóstico. Lo único que por ahora estamos haciendo, bajo una vaga e incontratable promesa de competitividad futura, es destruir, abaratar y desmontar lo que había, introducir en la universidad el mismo malestar y desánimo que reinan en los institutos de secundaria, y ello sin ninguna idea rectora de cuál pueda ser el modelo al que nos estamos desplazando, porque seguramente no hay tal cosa. A menos que la pobreza cultural y la degradación del conocimiento en mercancía sean para alguien un modelo a imitar.

Los otros 45 países europeos abordan el mismo proceso administrativo y formal y la mayoría de ellos también halla problemas, pero, según mi impresión, lo hacen con algo más de resolución, en una dirección u otra. Insistiendo en que la reelaboración de títulos contenía un «contrato social» —objetivos y también recursos—, se inició primero en España la redacción corporativa de «libros blancos», recorrido dilatado por las disciplinas, plagado de intereses concretos. Luego se procedió a la supresión de títulos y materias amenazados o preteridos, que constituyó otro motivo de queja, y ello no sin razón, puesto que —al proyectarse en principio un catálogo nacional de titulaciones, luego interrumpido por el cambio ministerial— caían como grados, por ejemplo, ciertas filologías y la Historia del Arte. Tras una agitación inicial que amplificó la prensa de oposición al Gobierno socialista, se prescindió de uniformar las titulaciones a escala estatal, y se dejó a la iniciativa de las universidades en el marco de su propia comunidad. Algunas han intentado una regulación interna, pero otras, como es el caso de Madrid, han dado libertad absoluta, a privadas y públicas, para implantar cuantos títulos quieran. Hay que decir que el informe publicado en 2007 por el Consejo de Coordinación Universitaria recomen-

14 José Luis Pardo, «La descomposición de la Universidad», *op. cit.* Madrid tiene ya nueve universidades privadas (frente a seis públicas). A principios de junio de 2009, por otra parte, se anunció la creación en Majadahonda (Madrid) de una filial de la London School of Economics, auspiciada por la Comunidad de Madrid, el Banco de Santander y la aseguradora Mapfre.

daba introducir recortes, porque un 60% de las titulaciones existentes en las universidades españolas no conseguía entonces matricular a más de 75 estudiantes cada año. Indicaba también que era preciso inyectar urgentemente más de 2.700 millones de euros en mejoras.

Las reformas y los ministerios

Desde el 14 de abril de 2008, una nueva ministra, Cristina Garmendia, concentró (aunque por menos de un año) competencias de Investigación y Ciencia junto a las propiamente de Universidades, en una remodelación ministerial que implicaba a éstas, de modo explícito, en la transferencia de tecnología a las empresas. La titular de este MICINN tardó en salir al paso de las protestas estudiantiles,¹⁵ pero lo hizo finalmente en enero de 2009, cuando el descrédito de «Bolonia» era ya general.¹⁶ Partidarios indisimulados de los nuevos gestores de la ciencia aplicada y la generación de patentes, puede entenderse que cundiera la idea de que la reforma de los estudios ponía la ciencia al servicio de la empresa, obediente al mercado y la demanda. Hasta la inmediata reestructuración de competencias, el 7 de abril de 2009 (que vuelve a unir todos los niveles educativos en manos del, hasta ahí, rector Gabilondo, si bien el presupuesto de investigación en las universidades permanece en el ministerio de Garmendia), la estructura que articula producción científica y universidad y aglutina a una parte importante de los organismos públicos de investigación (OPIs) viene marcada por la prevalencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Este predominio quedó afectado al renunciarse al proyecto de fusión de la totalidad de los organismos de investigación no universitarios bajo un CSIC que se vería reforzado en competencias y quedaría dividido en tres grandes áreas, un proyecto abandonado en febrero. Pero sigue siendo efectivo en cuanto que el MICINN se nutre básica-

15 La ministra venía de Genetrix, empresa biotecnológica creada en 2001 como *spin-off* del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, compartiendo responsabilidades con los científicos Carlos Martínez y Margarita Salas.

16 «El caso de la Ministra desaparecida» (*El País*, 21-XII-2008, 38) recoge la situación antes de Navidad: rectores y estudiantes, por separado, pidiendo información y orientación al MICINN, o exigiendo declaraciones. En ese tiempo Garmendia presentaba la «Estrategia 2015» en medios escogidos, en medio de una contradicción chocante entre lo idílico y futurista del documento y la radicalización de la movilización estudiantil.

mente de su personal y tradición científica, y puesto que se le reserva la financiación de la investigación pública, dejando al margen al nuevo MEC. Sigue, así, aún pendiente esa «Ley de la Ciencia» que sustituiría a la de 1985, también del PSOE.¹⁷ En la primavera de 2008, la ministra Cabrera, aunque continuó formando parte del gabinete, perdió las competencias universitarias, una pérdida que no sólo indicaba un giro radical, sino también que se había desistido por el momento de reforzar los lazos, en España tan livianos, entre industria e investigación realizada en las universidades. Por lo demás, al MICINN le ha correspondido, con la crisis, el recorte presupuestario más drástico sin que al MEC se le dote, de momento, más que de cantidades nada relevantes, para cumplir promesas electorales.¹⁸ Pero hasta ahí, la titular del MICINN había llegado a reunirse en enero con ciertos estudiantes para hablar de Bolonia —sin ser reconocidos por el movimiento estudiantil—, en un intento de «buscar conjuntamente salidas». Los rectores habían sido entre tanto los únicos interlocutores ocasionales, poco exitosos y poco creíbles a su vez. Pero esos estudiantes de la negociación parecían sintonizar con ellos, al pedir¹⁹ «acelerar los procesos de

17 El proyecto unía en régimen de *holding* seis grandes institutos (el de Salud Carlos III, el Nacional de Investigaciones Agrarias, el Geológico y Minero, el de Oceanografía, el de Astrofísica de Canarias, y el Centro de Investigaciones Energéticas), que quedaban englobados bajo el que debería haber cambiado su nombre por Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CSICT). Las tres grandes áreas internas, a su vez, hubieran sido Ciencias de la Vida, Ciencias y Tecnologías de la Materia, y Ciencias Humanas y Sociales.

18 Cristina Garmendia Mendizábal, «Ciencia e Innovación: ahora más que nunca», *El País*, domingo 22-III-2009, Suplemento Negocios, 21. Tomaba como pretexto unas declaraciones, pesimistas respecto al futuro económico de España, del Nobel de Economía Paul Krugman para insistir en el concepto de «innovación». Confiaba en los frutos de la proyectada Ley de la Ciencia, todavía sin presentar al Parlamento, y de la Estrategia Universidad 2015, paralela al proceso de Bolonia, y que «apuesta por una universidad de futuro, abierta y competitiva, en la que los estudiantes desarrollan su ciclo formativo en distintos centros de Europa; por unos campus universitarios que sean espacios en los que institutos universitarios, laboratorios y empresas cooperen en torno a proyectos ambiciosos que conecten las fortalezas de cada territorio con las oportunidades internacionales».

19 En una coordinadora (CREUP) de fugaz aparición, sus portavoces negaron «la veracidad de las principales quejas de los anti-Bolonia, como que el proceso suponga privatización de la universidad, que vaya a aumentar el precio de las matrículas, a haber un año obligatorio de prácticas en empresas, que se pierdan conocimientos con la nueva estructura de grados [...] y máster, o que desaparezcan las becas tradicionales» (*El País*, 15-XII-2008, 35).

acreditación de titulaciones» y presionar sobre la ANECA para agilizar la aprobación de títulos (*El País*, 22-XI-2008, 34). En el cambio de rumbo —vuelta atrás en la decisión de unir estrechamente la universidad al mundo productivo—, influyó, sin duda, la crítica estudiantil, pero también la opinión de los rectores: aunque Garmendia objetaba que dedicaba más del 50% de su tiempo en los medios a hablar de temas educativos, lo cierto es que se decidió renovar su equipo de imagen y comunicación a fines de año,²⁰ y cuatro meses más tarde sus competencias en universidades pasaban a Ángel Gabilondo. Para el presidente Zapatero, el cambio ministerial aseguraba una «salida directa, fuerte y segura» a la crisis.

El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados organizó una *Jornada* el 13 de marzo («Proceso de Bolonia: la dimensión social del Espacio Europeo de Educación Superior»),²¹ y en los medios de prensa afines al PSOE, el diario *El País* en especial, se visibilizó el esfuerzo por divulgar análisis sobre el coste real de la educación y la necesidad de ir hacia un modelo de universidad más eficiente, tanto en los resultados académicos como en patrones de financiación. Pero el arranque de ese interés comunicativo apareció en fecha muy tardía, cuando las movilizaciones estudiantiles, a pesar de no ser masivas, alcanzaban un punto en que podrían haber ido tanto hacia delante como hacia atrás, y podían enquistarse. Si se piensa que el compromiso es comenzar el curso 2009-2010 con los nuevos grados (muchos posgrados se han implantado antes, cosa difícil de entender), el haber esperado tanto para informar a la opinión de los cambios en curso es sorprendente.²² En el *sprint* final, el gobierno central pidió el apoyo de las Comunidades Autónomas y de los rectores, los mismos

20 La salida a los medios, tardía pero obligada por la acusación de «invisibilidad» a la ministra y a petición de los rectores, comprendió una campaña de publicidad corta, limitada a la web del ministerio y alguna prensa diaria, más algún puntual intento de apaciguamiento en la televisión pública en el mes de marzo y, finalmente, ráfagas radiofónicas a principios de abril.

21 Conferencia plenaria impartida por el Rector de la Universidad de Aarhus, y una mesa redonda: «Bolonia: ¿oportunidad o amenaza?».

22 «Las movilizaciones representan alrededor del 0,05% de la población estudiantil total», declaraba Cristina Garmendia a los medios de comunicación poco antes de las vacaciones de Navidad. «Sin embargo, su presencia en la Red es potente. Vamos a hacer un esfuerzo por estar ahí [...], queremos estar» (*El País*, 21-XII-2008, 38). En efecto, <www.quesbolonia.es> y <www.boloniasecundaria.es> son enlaces de la

que habían acudido antes al ministerio solicitando, a su vez, ayuda y colaboración.²³

Este juego de dualidades ha originado malentendidos, dilaciones y distorsión, que agudizan la confusión y amparan la sensación, cada vez más extendida, de que estamos metidos en un callejón sin salida: que lo único que podría pedirse es retroceder a tiempo, *parar Bolonia...* Desde la calle y las familias ha de entenderse mal por qué razón unas universidades (de entre las 50 públicas existentes, ya que el resto, hasta el número de 76, son privadas y hacen las cosas en completo silencio) han avanzado más en el proceso de adaptación al EEES, y otras en cambio no, qué fuerzas o intereses pueden haberlo retrasado en unos casos, en tanto que lo han disparado en otros. El chivo expiatorio es la ANECA, no exenta de responsabilidad en cuanto a los modelos de mejora de la calidad que tiene el privilegio de imponer. Puede chocar, por ejemplo, el retraso de la UCM, la mayor universidad del país, en tanto que, por ejemplo, la Universidad Carlos III concluyó el proceso de inmediato.

A principios de enero de 2009, la Unión Europea alertó a España de que retrocedía a gran velocidad en «innovación», según los marcadores (2008) que miden recursos humanos a la vez que tecnológicos y políticos (uso de banda ancha, disponibilidad de capital riesgo, o apoyo del gobierno al cambio tecnológico entre otras cuestiones). España ocupaba el puesto 16 en enero de 2009, en contraste con el rápido crecimiento y el ascenso logrados entre 2000 y 2006, período en el que había crecido a un ritmo superior (12,9%) a la media comunitaria. Ahora, sin embargo, la inversión pública y privada española en ese concepto era del 1,2% del PIB, siendo la media europea del 1,84%. Por supuesto, no todas las Comunidades Autónomas españolas han hecho el mismo esfuerzo, ni han presupuestado la innovación como clave de política científica. Es correcta y cuenta con estructuras la postura cata-

web del MICINN, destinados a alumnos universitarios y de bachillerato respectivamente, y fueron presentados oficialmente el 10 de marzo de 2009 por el secretario de Estado de Universidades (Màrius Rubiralta), el director general de Universidades (Felipe Pétriz) y el director adjunto de la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología), Alfonso Beltrán.

23 La red de Gabinetes de comunicación de las Universidades españolas, dependiente de la Conferencia de Rectores (CRUE), acordó a principios de marzo de 2009 coordinar sus esfuerzos de cara al 2015, en combinación con el MICINN.

lana, pero destaca Andalucía, que sin dejar de vincular su inversión a la mejora de las universidades públicas (quería triplicar el presupuesto para 2011 y la oferta de becas de movilidad tanto para estudiantes como investigadores), cuida los complementos autonómicos de productividad para los profesores y anima la innovación docente.²⁴ Sea como fuere, tampoco para el conjunto de Europa resulta ya posible alcanzar el objetivo de Lisboa de destinar el 3% del PIB a I+D. Sabemos, sin embargo, que el horizonte de proyección I+D+i deposita en la «i» de innovación la esperanza de compensar el retraso.²⁵

La respuesta de las universidades españolas al mandato global europeo está siendo así desigual, producto combinado de las distintas políticas de sus propias autonomías, de las decisiones académicas de cada rectorado, y de su respectiva capacidad investigadora, redes y resultados. Todo revela una estrecha dependencia del marco autonómico o local, en la característica tenaza de la universidad pública española por la peculiar concepción de autonomía universitaria que nos es propia. En su conjunto, España tiene dificultad en asumir el coste de una integración competitiva, y de poco han de servir seguramente los 127 millones de euros con que el Gobierno quiso frenar la revuelta estudiantil a finales de enero de 2009, dinero que además no salió de Hacienda, sino de una reasignación de urgencia de los propios fondos del MICINN para evitar el deterioro de imagen y salir al paso de la rei-

24 Andalucía promulgó en 2007 una Ley de la Ciencia, que está en el origen de la iniciativa ministerial que aún no ha concluido, a su vez. Creó también una Agencia de Calidad propia (AGAE), como la mayoría de las Comunidades Autónomas, si bien hay que decir que de momento sólo ésta y la catalana (AQU), junto con la estatal ANECA, han sido reconocidas por la agencia de calidad europea, ENQA. El Plan andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) para el período 2007-2013 promete una inversión superior a los 25.400 millones de euros. Ello supone que en 2010 se dedicaría el 1,8% del PIB andaluz a I+D, para alcanzar el 2% en 2013. Se espera una participación tecnológica del sector privado en torno a un 50%.

25 El comisario europeo de Empresa e Industria, Verheugen, alertaba de ello en especial a Italia y España, instándoles a reforzar sus políticas en esa dirección. Destacaba que el crecimiento del rendimiento en recursos humanos estuvo por debajo de la media. Con todo, hay que decir que en España el papel del Gobierno sigue siendo decisivo, dada la bajísima inversión de las empresas en investigación. A la cabeza, figuran Alemania, Suecia, Finlandia, Reino Unido y Suiza. La distancia con Japón y EE. UU. se había aminorado gracias al esfuerzo realizado por algunos de los nuevos países, como Chipre, Bulgaria y Rumania (*El País*, 23-I-2009, 37).

teración de que la reforma se abordaba sin recursos.²⁶ No obstante, sólo una parte de las becas prometidas depende del gobierno central: el resto de la financiación corre a cargo de las autonomías y de los recursos allegados, entre otros, por el Consejo Social de las universidades que residen en ellas. Ése es otro de los lunares de este panorama declinante: el fracaso en el desempeño de sus funciones de los consejos sociales, en general.²⁷ La libertad para emplear los fondos recibidos sin rendición de cuentas en el Estado de las autonomías —además de los tópicos de la cultura universitaria— complica el balance y la perspectiva, y no hay de momento estadísticas homogéneas, sino una maraña de partidas y convenios suscritos por los gobiernos locales con el gobierno central para la orientación del gasto. A principios del curso 2006-2007, ya eran trece las Comunidades Autónomas que dotaban a sus universidades en función de evaluaciones y de resultados.

Los discursos y la infraestructura

La protesta de los estudiantes —e incluso de la mayoría de profesores que se pronuncian—,²⁸ remite escasamente sin embargo a la situación que acabo de describir. Hasta que la crisis económica no ha hecho mella en las sensibilidades colectivas, Europa ha tenido buena imagen en España. Pero hoy, al margen de otras consideraciones sobre la UE, son realmente pocos los aplausos que recibe en España su exigencia educativa al más alto nivel. En marzo del 2009, escribía Fernando Savater:²⁹

26 «Plan de acción 2009 para el apoyo y la modernización de la Universidad española», aprobado en Consejo de Ministros de 30 de enero.

27 Las becas deberían crecer (aunque en este momento no se han visto aún), en tanto que la vía autonómica canalizaría incentivos a las universidades que antes, y en mayor número, pongan en marcha los nuevos títulos. A los estudiantes se les anima a abandonar los planes en curso y pasarse a los nuevos. Vagamente, el plan contiene también alguna idea sobre promoción en el extranjero de los especialistas españoles en humanidades y de sus textos escritos en español. Pero a este último objeto sólo se le dedican cinco millones de euros.

28 A título de ejemplo, denunciando los «males» y corruptelas de la universidad, véanse J. A. Piqueras, *El Mundo*, 20-II-2008, y P. Jauralde, *El Mundo*, 5-IV-2008. Al contrario, Gabilondo encontraba Bolonia «un asunto» que afectaría a toda la sociedad, «una oportunidad para la mejora». El antiguo rector de la Universidad Carlos III, Gregorio Peces-Barba, escribía en *El País* el 14 de febrero, a su vez, que con las actuaciones de la ministra Garmendia, «la universidad no queda bien parada».

29 Fernando Savater, «Preguntas sobre Bolonia», *El País*, 27-III-2009. Acaba pidiendo una moratoria antes de que se produzcan «daños graves e irreparables»:

Naturalmente, nadie puede estar en contra de promover la compatibilidad de las titulaciones y la movilidad de los estudiantes, de facilitar a estos últimos su inserción en el mercado laboral europeo o de transformar nuestras universidades y volverlas más atractivas para captar estudiantes de otras partes del mundo. ¿Pero es eso lo que previsiblemente se va a producir una vez culminado el proceso de Bolonia? ¿No se les ha ocurrido pensar a nuestras autoridades que una cosa son los efectos deseados y declarados de una determinada política y otra sus efectos reales?

En la esfera ministerial se pensó que reticencias como ésta, las más comunes, eran efecto de una mala política de comunicación. La comunidad universitaria (tanto profesores como estudiantes) desconocen aún la respuesta acertada a una pregunta como ésta: «¿A qué va a equivaler la licenciatura que ahora estoy a punto de concluir...?». Las licenciaturas de hoy serán sustituidas por grados, que en España durarán cuatro años en lugar de lo normal en la mayoría de Europa, *tres*, pero que serán equivalentes. Es lo que finalmente se decidió, en 2005, después de grandes vacilaciones.³⁰ Pero parte de las protestas se han orientado a denunciar que los estudiantes futuros cursarán *sólo cuatro* años, perdiendo contenidos, formación. Se acepta mal la idea de una capacitación gradual, diferente y diversificada en función de la secuencia grado + posgrado + (quizá) doctorado. Con todo, al ir haciéndose cargo de la situación, muchos estudiantes opinan, claro está, que les hubiera favorecido más el módulo 3+2. Pero lo cierto es que al principio del debate, en 2002-2003 y hasta el momento de la toma de decisiones, la consulta a expertos y universidades favoreció al 4+1, por contagio de las licenciaturas implantadas en la reforma de 1989 (se reservaba el 3+2 para ingenierías técnicas o ciertas diplomaturas con competencias profesionales concretas).³¹

«¿Son conscientes las autoridades ministeriales y los rectores de cómo se están elaborando los planes de estudio en la mayoría (por no decir en la totalidad) de las universidades públicas españolas? ¿Era esto lo que se pretendía cuando se decidió dar libertad total a las universidades a la hora de configurar titulaciones y de diseñar planes de estudio?».

- 30 RD 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios de grado (BOE 21, 2842 y ss.); RD 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de posgrado (BOE 21, 2846 y ss.); Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 89, 16241 y ss.); RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE 260, 44037 y ss.).
- 31 Algún documento interno de alguna universidad comentando el borrador del MEC, sin embargo, contenía la cautela de que debería esperarse a ver qué sucedía en los

Los sucesivos ministerios fueron así sensibles a las presiones de los gestores universitarios, que decididamente no quisieron afrontar el riesgo de recibir una financiación menor de parte de sus comunidades respectivas: recordemos que un porcentaje importante va ligado al número de estudiantes, y es ese número, a su vez, el que justifica plantillas mayores de profesorado. Los grupos, no obstante, en muchos de los estudios impartidos en universidades grandes, siguen rondando los cien alumnos por clase o grupo, si es que no más. Es un círculo vicioso que explica que esas mismas universidades, como es la UCM, hayan vuelto a imponer magnitudes imposibles para abordar la docencia activa con seriedad, y en especial atender a las prácticas, que constituyen el foco práctico de la innovación.

En marzo del 2009, la OCDE le ha recordado a España la escasa calidad de sus posgrados —los másteres oficiales de nuevo cuño—, tanto en conjunto como por separado (*El País*, 11-III-2009, 31). La concentración en un solo año —hasta aquí conveniente para atraer alumnos que ya han cursado antes cinco años—, no garantiza sin embargo una formación específica homologable (y el recurso por parte de muchos estudiantes de alargar por un segundo año los estudios no resuelve el deficiente resultado). Como lo que define el total de la formación del estudiante es la suma de grado y posgrado, hasta un total de 360 créditos, los másteres se han reducido en extensión y muchas veces también en profundidad (entre 60 y 120 créditos, según sea a su vez la duración de los grados que les darán acceso). Tal deficiencia, advierte a España la OCDE, podría convertirse a corto plazo «en un serio peligro para su posición internacional».³² Muy pocos entre los rectores han previsto ese riesgo o se han atrevido a afrontarlo, prisio-

países europeos más dinámicos, que en muchas de las reuniones iban mostrando inclinación recurrente por el 3+2. Hasta conocer lo que se haría en la Cumbre de Berlín de septiembre de 2003, y quizá hasta la primavera de 2004, se decía, debería contenerse la decisión. Finalmente, como es sabido, fue la contraria. En tanto que algún punto de aquel borrador (la troncalidad o la condición de que sólo hubiera un posgrado por área de conocimiento) fue mejorado en la normativa, la mayoría fue del gusto de los rectores. Lo mismo sucedió en relación con el sistema de acceso y promoción del profesorado funcionario (acreditación), algo más tarde, en un procedimiento después tan criticado.

32 Uno de los expertos, Guy Haug, insistía en que los posgrados serán los que definan la calidad de una universidad concreta, y no los grados. El prestigio de los campos dependerá de ellos, es evidente.

neros de su elección por sufragio universal (una de las mayores innovaciones que introdujo la LOU, en diciembre de 2001), desviando la presión hacia la ANECA.³³ La OCDE alertó también del abandono en que ha quedado el doctorado, flotante en la corona de los másteres, pero casi siempre sin un programa de estudios específico, y que en adelante deberá constituir «prioridad». La disolución del tercer ciclo se había decidido, paradójicamente, tras ofrecer resultados positivos la fase primera de evaluación, voluntaria pero generalizada, que permitió a ciertos programas de doctorado lograr una «mención de calidad».³⁴

Al mirar desde Europa —y esto refleja el informe citado—, se echa de menos todavía una suficiente conexión de los estudios superiores con la Formación Profesional —que va siendo más atractiva poco a poco para los adolescentes y los empresarios—, y es reducida la cantidad de titulaciones que la abordan aún. Los reproches se cierran recomendando una gestión *no académica*, de aquí en adelante (el asunto del gobierno de las universidades es, sin embargo, casi un tabú), y se insiste en la urgencia de reforzar las becas. Hasta ese momento, sólo podía valorarse un gesto: en 2006 se pusieron en marcha, como alternativa, unos préstamos-renta al modo anglosajón, para los estudios de máster, con condiciones de devolución aceptables, que además mejoraron al año siguiente. Pero el informe insiste en denunciar la exigua cantidad de becas en España.

33 Los primeros posgrados se impartieron en 2007-2008, sin pasar verificación de agencia. Las comunidades de Andalucía, Cataluña y Valencia implantaron posgrados sin acreditación, o con informes negativos. A partir de ahí, normalizada la obligatoriedad del procedimiento, ya no ha sido posible evitarlo. Según datos de la propia Aneca, en 2007 habían afrontado la evaluación un 45 % de los títulos de posgrado (1.784 másters y 860 doctorados de un total de 2.644 títulos). De esos, el 36 % pasó el listón y recibió mención de calidad. Hay que aclarar, no obstante, que la no acreditación de los títulos no merma su valor profesional: son títulos oficiales y válidos como hasta la fecha en que cambió el sistema. En 2007, por lo demás, sólo 612 de los doctorados españoles, de un total de 2.742, obtenían la «mención de calidad». Que la mayoría de las universidades españolas carezca de la tradición de generar y conservar datos que sirvan para la medición estadística por terceros, complica la valoración y refuerza el poder de los agentes e instrumentos burocráticos.

34 Véase, *ANECA. Informe...* (disponible también en Internet, así como los materiales de procedimiento y muchas referencias bibliográficas relacionadas con todo lo que aquí se comenta).

Unos pocos datos sobre el gasto por alumno contribuirán a iluminar la situación. La universidad pública con mayor gasto a principios de 2007 —un momento en el que se pensaba todavía en la posibilidad de reducir la competencia interna entre títulos semejantes y entre universidades cercanas—, era la Universidad Rey Juan Carlos, del sur de Madrid (3.381 euros por estudiante); la segunda la Miguel Hernández, de Elche (2.453 euros); la tercera, la cuarta y la quinta se distanciaban escasamente: Politécnica de Valencia (1.738 euros), Jaume I de Castellón (1.717) y Universidad de Burgos (1.712). Si bien la UCM se situaba al final de la lista (435 euros por estudiante, seguía siendo la universidad más demandada y ocupaba el 5º puesto —*ex aequo* con Santiago, Navarra, Elche y Córdoba— por número de tesis doctorales defendidas. Como dijimos, poco a poco y desde el otoño de 2006, se perfila el modelo de financiación autonómica por objetivos. Las evaluaciones de *calidad* son así imprescindibles, y a ello se aplican tanto la agencia nacional como las autonómicas, todas ellas conectadas a la principal, ANECA, y en algún caso miembros directos de ENQA, la agencia europea. Las últimas en incorporarse a esta fórmula fueron Baleares, Extremadura, Murcia y La Rioja, y el mayor esfuerzo financiero para incentivar la calidad en las universidades públicas ha correspondido a Navarra, País Vasco y Cataluña. Pero ello no puede recubrir la dejadez del gobierno central. Cuando, en octubre de 2006 el entonces presidente de la CRUE, el rector de Oviedo Juan Vázquez, transmitía el cálculo de que hacían falta inmediata 2.350 millones de euros para afrontar la modernización ideada, la media del PIB destinado al efecto por los países de la OCDE era de un 1,3%, en tanto que España dedicaba un 1,12%. Vázquez insistía en el eje sobre el que había pivotado su gestión desde 2003: que el Gobierno de España estableciera un pacto con las autonomías para garantizar niveles suficientes de financiación.

El 30 de enero de 2009 el MICINN colgó de su web una ingenua *Declaración de Apoyo y Defensa de la Universidad Pública Española*, decálogo de compromisos de «calidad, modernización, autonomía universitaria y financiación sostenible, igualdad de oportunidades, adaptación al EEES, eficiencia, transparencia y simplificación administrativa, promoción docente e investigadora de las Humanidades y las Ciencias Sociales, internacionalización de la universidad», y —más sorprendentes en su formulación— compromisos

«con la responsabilidad social universitaria y la transferencia responsable de conocimiento», y «con la activación de la economía mediante el desarrollo de los campus universitarios». Son los principios básicos de la Estrategia 2015, a negociar con las comunidades. El 18 de febrero siguiente, la ministra Garmendia acompañaba a la alemana Anette Schavan, titular de Educación e Investigación, en la conferencia que ésta impartió en la Fundación Rafael del Pino de Madrid, sobre el EEES y el papel de la innovación en el crecimiento económico.³⁵ Con los fantasmas de la movilización estudiantil a sus espaldas, la española defendía su apuesta³⁶

por una universidad abierta y pública, reflejo de nuestros valores y principios, abierta a todos los ciudadanos, sin excluir a nadie por motivos sociales, económicos o de cualquier otra índole. Así como a las nuevas ideas, y que deberá ser capaz de reaccionar e incluso anticiparse a las preocupaciones de una sociedad que necesita referencias morales e intelectuales para hacer frente a sus retos.

Titulaciones nuevas

«Grado» es un término clásico en la historia de las universidades. Se conocen bien desde tiempos antiguos su función, tipo de estudios y nivel. Pero la mayoría de los universitarios españoles ignoramos hasta los datos más elementales acerca de la tradición institucional y académica. La adopción del término *grado*, impuesta ahora de manera tan forzada como equívoca —peor está siendo aún la comprensión de en qué consiste un máster—, levantó ampollas desde el principio. Después de mucho titubear, la decisión adoptada conllevaba el equívoco, pero contentaba a las fuerzas académicas y se amparaba en confusas razones de equidad económica y social: mantenía precios públicos por más tiempo, sin tener que abordar el tema de las becas. En cuanto a los másteres, las universidades públicas que ya los han comenzado a implantar tropiezan a veces no con problemas de demanda, como imaginaron, sino con la imposibilidad material de mantener niveles aceptables de eficiencia entre los estudiantes, en una programación que muchas veces

35 Anette Schavan disertó sobre «El cometido de las universidades en la sociedad del conocimiento», en el ciclo de conferencias «Europa ante los cambios universitarios», inaugurado el 26 de junio de 2008 por el Comisario Europeo de Educación, Jan Figuel.

36 <www.micinn.es>. Nota de prensa.

supera sus posibilidades reales de concentración. En suma, o bien los estudios no se han definido adecuada y claramente, o bien la fuerte intensividad no es asumible, pues obedece a objetivos más propios del doctorado y no de la esfera intermedia —y de naturaleza plural— que es el máster. El ciclo superior, para sorpresa que ya comenté, queda por el momento reducido a la elaboración de la tesis doctoral, extrañamente adherida al máster cursado previamente, y para ella no se exige más contribución discente. La mejora del doctorado en España, con todo, era bastante clara desde la reforma acometida, en 1985, por el ministro socialista José M. Maravall.

Referido al curso 2007-2008, el *Estudio de la oferta, demanda y matrícula de nuevo ingreso en las universidades públicas y privadas*³⁷ indica que unas 50 carreras tenían vacantes plazas en un 40%, y que había unos 40.000 puestos universitarios sin cubrir en toda España, como producto de la proliferación de títulos y universidades. Aunque esto no se comenta apenas, ni dentro ni fuera de la universidad, los estudios de viabilidad de la reforma (2002-2003) resaltaban la variedad exagerada de los estudios de grado y su reiteración en espacios geográficos muy cercanos. No se recomendaba suprimir los estudios menos demandados sino reagruparlos. En cierto modo, sólo Cataluña ha seguido el consejo, pero sí se ha tendido lógicamente a disminuir el número de plazas ofrecidas en aquellas titulaciones menos demandadas. Una plantilla básicamente compuesta de profesorado funcionario, obviamente, no es el único obstáculo, pero sí quizá es el más evidente.³⁸ Y sin embargo, políticos y gestores universitarios, por igual, están perdiendo la oportunidad de utilizar la potente herramienta que, en principio, ofrecía la contratación laboral (la otra novedad interesante

37 Accesible en <Elpaís.com-Educación>, 9-II-2009 y en la web del MICINN.

38 Algunas de las opciones que cubrieron sus plazas ofertadas: Medicina, Farmacia, Veterinaria, Enfermería, Biotecnología, Arquitectura, Ingeniería aeronáutica, Psicología, Periodismo, Filología Vasca, y Maestros de Infantil y de Primaria. En cambio, en Filología Portuguesa quedaban desiertas un 87%, en Hebrea 85%, en Románicas 83%, en Italiano 80%... Pero no es sólo en Letras: en Ingeniería Técnica Industrial Textil las vacantes fueron el 81%, en Geodesia el 78%, en Ingeniería de Materiales, el 77%. Las carreras más cotizadas, esta vez por considerarse explícitamente menos abocadas al paro, son: Administración y dirección de Empresas, Ingeniero Industrial, Economista, Ingeniero Técnico Industrial, Medicina, Derecho, Ingeniero Informático, Ingeniero de Caminos, Ciencias Empresariales, e Ingeniero Técnico Informático.

que introdujo la LOU). Aunque bien es verdad que la concesión de esos contratos, sin dejar de ser pública, se pervierte en la práctica, inscrita en una cultura profesional que en ciertos ámbitos está dominada aún, y más de lo tolerable, por clientelas y grupos de interés.

España es el único país de la OCDE en el que se ha reducido el poder adquisitivo del salario medio entre 1995 y 2005 (un 4%), y lo hizo ya, paradójicamente, en tiempos de bonanza y crecimiento. La tasa de temporalidad en el empleo es muy elevada: un 31% de eventualidad, más del doble de la media europea (14,5%). Más de un tercio de los titulados universitarios entre 25 y 64 años desempeña trabajos que no precisan de alta cualificación (sólo Irlanda y Estonia sacan peor rendimiento a sus titulados) (*El País*, 12-IV-2009, 32). El índice de paro juvenil (no sólo universitarios) a finales de marzo pasado, rozaba en España el 30%, un récord en la Unión Europea.³⁹ Acaban de licenciarse aproximadamente otros 200.000 jóvenes: «Joven, con uno o varios títulos universitarios, un máster recién acabado y dominio de varios idiomas» —puede leerse en un diario antigubernamental (*El Mundo*, 25-II-2009, 1, «Campus») —, «éste es el candidato ideal para engrosar la lista de españoles en paro» Entre los titulados en FP, efectivamente, el paro no había golpeado tan fuerte: un 5% en 2007, cuando casi un 40% de los titulados universitarios españoles no había conseguido aún estabilidad laboral, cinco años después de licenciarse, y percibían un salario medio de 1.414 euros mensuales (sólo en Chequia se pagaba peor), mientras los graduados alemanes, primeros en la lista, percibían casi 1.280 euros más (*El País*, 12-IV-2009, 32).

Por otra parte, es evidente que la mala comprensión del significado e implicaciones del «crédito ECTS», expresión del nuevo ideal educativo, no es sólo un problema español. Lo específico de nuestro caso tiene que ver con tres tipos de asuntos. Ante todo, está el déficit (que ya no es total, por fortuna) de una cultura científica y de una tradición educativa que primen la libre discusión de los textos, y la experimentación práctica, por parte de los aprendices. Ello viene de atrás, su

39 El 30,4% exactamente, en enero de 2009, según el Observatorio de Empleo del Consejo de la Juventud. Otros datos: un 21,5% en Francia, un 17,7% en Portugal, y un 10,2% en Alemania, siendo la media de la UE de los 27 un 17%. (El porcentaje va establecido sobre la población laboral activa menor de 25 años.) Los programas de orientación para el empleo, desde el comienzo de la crisis, recogen masivamente a jóvenes sin empleo, incluso ya de las ingenierías técnicas.

arraigo histórico es persistente y tiene un peso grande todavía en la sensibilidad colectiva de los enseñantes, incluso en educación superior. Después, está la opacidad, los titubeos e indefinición injustificables de los gobiernos acerca de los acuerdos europeos. Ambos partidos de gobierno, PP y PSOE, han minusvalorado además la responsabilidad que entrañaba dejar a Comunidades Autónomas y consejos de gobierno de las universidades, alternativa o combinadamente, la gestión de un cambio tan profundo. Las instrucciones de los ministerios MEC y MICINN, siempre a remolque y contradictorias, han sido burocratizadas y banalizadas por los equipos académicos, y siguen siéndolo hasta hoy, salvo excepciones. Y en tercer lugar, pero no menos importante, está la falta de recursos específicos para facilitar a profesores y estudiantes acostumbrarnos a modos menos memorísticos y superficiales de aprendizaje. Que no es lo mismo que la adopción masiva e indiscriminada de nuevas tecnologías y/o modelos didácticos.

Se huye —o eso al menos parece— de procedimientos reales que permitan un cambio que no sea sólo retórico y superficial. El refuerzo del aprendizaje creativo, y a la vez *práctico*, exige como condición *sine qua non* que los grupos de docencia sean reducidos, pero las previsiones —por razones de financiación— no van por ese lado, salvo en las universidades de escasa afluencia. Algún estudio reciente pone además de relieve —así el *UE Converge*, realizado por la Cámara de Comercio de Madrid y la Fundación Universidad Empresa— que a los licenciados españoles les faltan habilidades tales como capacidad de iniciativa y resolución de problemas, tomar decisiones y asumir riesgos, ejercer liderazgo y verdadero interés por la calidad del trabajo realizado. Y, cómo no, carecen todavía, a pesar de la mejora, de un suficiente dominio de idiomas.

Son pocos quienes hablan de la equidad social en términos no utópicos, socio-económicos. El sociólogo Castells está entre ellos y se atreve a proponer, de acuerdo con la tradición americana, el aumento del precio de las matrículas para que la parte más importante del presupuesto de las universidades dependa de la aportación de sus estudiantes, y aquéllas se vean obligadas a competir para atraerlos, ofreciendo más calidad:⁴⁰

40 A contracorriente de la opinión mayoritaria, y en evidente coincidencia con las recomendaciones europeas, recomienda Castells (cf. nota 46) «renovar la gobernanza

El Estado tiene que dar becas a todos los estudiantes que las necesiten. Precios públicos bajos para todos es una política regresiva, como demuestran los estudios internacionales, porque si los hijos de buena familia pagan lo mismo que los de familias modestas, quiere decir que nuestros impuestos subvencionan a los más ricos. Equidad es que paguen todos más y que la mayoría reciba becas según el ingreso familiar. [...] Las universidades que no den buen servicio tendrán que darlo si no quieren que los estudiantes se vayan a las que funcionen mejor. Aguijoneadas por la búsqueda de recursos, dedicarán más esfuerzo a innovar en la enseñanza y a dar una formación útil que a pedirle al Estado café para todos.

Salvo entre los propios estudiantes, que a veces más que reclamar becas piden poder seguir compatibilizando trabajo y estudios —algo que se ha ido imponiendo hasta aquí, con gran tolerancia del profesorado en cuanto a la obligatoriedad de asistir a clase—,⁴¹ la demanda de becas no ha sido muy fuerte, si bien es el único punto en el que parece ir llegándose a un acuerdo. Ése es el marco en el que se entienden otras medidas —anunciadas o ya tomadas—, extremadamente respetuosas con la libre elección de los jóvenes en cuanto a ocupaciones laborales y búsqueda de empleo, aunque no favorezcan la concentración en el estudio y los buenos resultados. La «Estrategia 2015» contiene en borrador un *Estatuto del Estudiante* que asegura la compatibilidad de trabajo y estudios como un «derecho» en torno al cual giran, a su vez, los demás derechos.⁴² A mediados de marzo de 2009, sin embargo,

universitaria, empezando por la elección de los rectores. Las mejores universidades del mundo son las que gozan de autonomía de decisión, combinando en su gobierno la gestión académica, descentralizada en manos de los profesores, con la dirección estratégica y la necesaria disciplina por parte de la administración de la universidad. ¿Quién nombra entonces a los rectores? Patronatos de personalidades independientes nombrados por quienes aportan los recursos. En el caso de las universidades privadas, los donantes. En el caso de las universidades públicas, los parlamentos y gobiernos que administran nuestros impuestos. Pero, ya nombrados, patronatos, administradores y profesores gozan de autonomía para gestionar la universidad».

41 En algunas protestas, incluso, los estudiantes vinculan la temida y denostada «mercantilización» con la plena dedicación obligatoria: «Los créditos ECTS», dijo la Unión de Historiadores Progresistas a la Junta de Facultad de Geografía e Historia de la UCM, el 25 de septiembre de 2008, «consagran el modelo pedagógico que genera la figura del estudiante a tiempo completo, es decir: las ocho horas diarias de trabajo se trasladan a la condición estudiantil. La expropiación del tiempo de vida, forma y contenido de la nueva condición estudiantil aparece con el objetivo de medir el tiempo de estudio, aumentando los ritmos, que son verdaderos ritmos de trabajo» (octavilla multicopiada repartida en la sesión).

42 El 23 de enero de 2009, antes de reconocerse públicamente la existencia de crisis económica, la ministra Garmendia presentaba un borrador ante asociaciones estudiantiles

Rodríguez Zapatero en persona anunció que, a partir del próximo curso, se devolvería el dinero de las matrículas a los estudiantes universitarios que aprobaran todo el año académico de una vez. Y es que el 90% de los alumnos no lo consigue (de hecho, más bien por no presentarse a examen que por no dar el mínimo nivel). Las tasas de matrícula, aun con la elevación de los últimos tiempos, son bajas y aportan solamente un 6% de la financiación. Dos meses después, no se sabía aún qué ocurriría con la estimación presupuestaria de 100 millones de euros que debería ser el peldaño primero de un nuevo modelo de financiación, según aquel proyecto salido del Consejo de Universidades y la Conferencia General de Política Universitaria (*El País*, 15-III-2009, 34). Seguía sin aprobarse, a la espera de decidir en qué instancia finalmente recaería, un programa de «becas salario» que permitiera reforzar la igualdad de oportunidades, puesto que en realidad los estudiantes menos fuertes económicamente apenas pueden afrontar las enseñanzas «duras», las técnicas de grado superior.

Otro problema tiene que ver con la formación del profesorado de secundaria, afectado en las últimas décadas por multitud de cambios y sometido a los dictados de gestores afectos a planteamientos pedagógicos que no siempre se han revelado eficaces, ni mucho menos. En la primavera del 2009 se sumó a la agobiante expectativa que, cada cierto tiempo revela el informe PISA, la situación creada por una normativa, publicada en otoño de 2007, que obligaba desde entonces a los graduados que no poseían ya el llamado Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP), si es que querían enseñar en los niveles primario y secundario, a cursar un máster específico y fuertemente orientado en sus directrices psicopedagógicas desde el MEC.⁴³ No conllevaba

no contrarias a Bolonia, anunciando que el gobierno destinaría cinco millones de euros en 2009 para contratar a tiempo parcial a estudiantes que colaboraran en tareas culturales y solidarias, entre otras, los «Campus de Excelencia» que prometía crear, además de reconocer créditos a la experiencia laboral o profesional de los estudiantes y a sus actividades culturales y deportivas. El estatuto se detuvo incluso antes de llegar Gabilondo al ministerio. Debería haber culminado con la aprobación de un Consejo del Estudiante Universitario, máximo órgano de representación estudiantil presidido por la ministra, y del que formarían parte dos estudiantes por cada universidad, pública o privada, con delegaciones de las cuatro asociaciones estudiantiles invitadas. (*El País*, 24-I-2009, 31). No aflojó ello la tensión estudiantil y los estudiantes anti-Bolonia siguieron convocando paros.

43 «Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de

inserción laboral, ni siquiera a título de prueba. Poco antes de su aprobación, y en tanto que unos corrían a aprovechar la última oportunidad de obtener el CAP —también ofrecido ahora por universidades privadas, con libertad para fijar precios—,⁴⁴ los estudiantes anti-Bolonia usaron el rechazo al máster como fuente de realimentación. A partir del curso 2009-2010 el máster de profesorado sería obligatorio, sin vuelta atrás, como advirtió en diciembre de 2008 el entonces Director General de Universidades, Felipe Pétriz, a pesar de que la protesta estudiantil —y a remolque de ésta, algún rector— pedían su retirada.⁴⁵ Hubo responsables de formación del profesorado que no le creyeron, pero así está siendo (*El País*, 15-XII-2008, 34). Que el CAP, que se diseñó en los años sesenta y ha sobrevivido, acartonado o casi virtual en las universidades, haya derivado en esa situación, no deja de ser indicador de problemas más hondos, que afectan al conjunto del sistema educativo en España. Tienen que ver con la financiación, claro, pero quizá en mayor medida con la confianza en el valor de la educación.

Son muchos, en resumidas cuentas, los conflictos que lastran la transformación del marco educativo, y a cuya solución no favorecen las vacilaciones, retrasos y tanteos legislativos, así como la falta de volun-

Ministros de 14 de diciembre de 2007, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas» (BOE 305, 52851 y ss.).

44 En Alicante se levantaron aulas prefabricadas para atender la avalancha de solicitudes, en una demanda que se había duplicado (de 1.000 a 2.000), como en Zaragoza, Barcelona o Madrid. En Sevilla sólo subió el 50%. La UCM recibió en años pasados en torno a 12.000 alumnos. En 2008, tuvo 5.000. Mientras que en la pública el cursillo cuesta en torno a 200 euros, la privada oscila entre 1.000 y 1.600 en la actualidad.

45 Lo incorpora también el *Manifiesto* hecho público por la Facultad de Filosofía de la UCM, en el que se insiste en su apariencia de proyección del CAP, eludiendo formación específica a los futuros docentes (cuya preparación, en un futuro inmediato, quedará cercenada por la menor extensión de las carreras). Los porcentajes que marca el decreto son de 40% para didácticas de las materias que hayan de enseñarse, 25% de prácticas en los centros, y el resto para sociología, pedagogía y psicología, más una ampliación de contenidos específicos, a partir de los que los estudiantes posean ya. (El manifiesto recoge un acuerdo de Junta de Facultad de 29 de enero de 2008 y se publicó en prensa como «La profesión del profesor». En la web: <<http://fs-morente.filos.ucm.es/manifiesto/index.htm>>).

tad y resolución de muchos agentes académicos, incongruentes al poner en práctica la respuesta a sus propias demandas. El desconcierto ha incidido en los centros, produciendo desánimo y llevando a muchos a la inhibición o a la protesta vacua. La *burocratización*, consecuencia casi inevitable de la confusión que exuda la tecnología informática, es la nebulosa inevitable a que una infinidad de medidas —no necesariamente coherentes— de interminables órdenes y modificaciones, de estructura o formato, acaban por conducir. Tenga la culpa o no de todo ello «Bolonía», lo cierto es que la cadena de enlaces burocráticos va a limitar a corto plazo las capacidades creativas de profesores y estudiantes, ésa es la convicción general. No obstante, apenas se discute cómo atajar los males de manera operativa y concreta. Los debates sobre la universidad son fuertemente emocionales, recuerda Manuel Castells,⁴⁶ quien opina que limitar el despliegue de emociones invocando la racionalidad —que es lo que a veces se consigue al salir al paso de las críticas— podría reforzar el blindaje de los males profundos de nuestra universidad. Por lo demás, si es cierta la presión de Bruselas en este aspecto, como en otros, ello no debería servir de coartada para imposiciones prácticas derivadas de una deficiente comprensión del alcance real de las transformaciones, o que en realidad se deben a presiones y servidumbres internas. Las universidades de reciente creación y pequeño tamaño tienen ventaja frente a las grandes y antiguas, sobre todo si la autonomía a que pertenecen las ampara, y espera obtener de ella rentabilidad. El profesorado, en última instancia, ha ido envejeciendo como colectivo —pero vacila a veces en aceptar los planes de jubilación incentivada—, y se halla no sólo desorientado ante los cambios, sino alarmado ante el agobio de tareas mecánicas y administrativas que es ya realidad cotidiana e implacable.

46 Manuel Castells, «La universidad a debate», *La Vanguardia*, 29-XI-2008, 21. Por su trayectoria personal, Castells es uno de los pocos intervinientes en el debate que no teme la financiación privada en la universidad pública: «Hay en el mundo universidades públicas, como mi Universidad de Berkeley, que reciben fondos de investigación y becas de empresas sin comprometer la independencia y la calidad de la enseñanza. [...] Las empresas saben que la autonomía universitaria es esencial para que les sirvan sus productos. Hay que conseguir incremento de la financiación pública y posibilidad de recabar financiación privada y programas con empresas que proporcionen una formación directamente útil en el mercado de trabajo». En la financiación privada, sin embargo, no parece posible por el momento confiar en España, no sólo porque falta cultura claramente, sino porque las propias empresas y entidades financieras no parecen estar por la labor. Y menos con la crisis.

El Estado de las Autonomías

Lo más importante es seguramente, a la hora de hacer prospecciones de futuro, el hecho de que una Comunidad Autónoma haya decidido apostar o no por el sostenimiento de sus universidades públicas. En algunas, como Madrid y Valencia, ambas regidas por el PP, las instituciones privadas son objeto de atención y ventajas relativas. Las demandas de financiación extraordinaria que esporádicamente hacen las autoridades académicas al poder central sólo podrían atenderse ligadas a propuestas de armonización o, como impulso suplementario, para equilibrar fuerzas. Esperanza Aguirre apretó las tuercas a las universidades madrileñas en noviembre pasado, esperando ser seguida por otros presidentes autonómicos del PP. En Madrid estudian aproximadamente 1,3 millones de universitarios, uno de cada cinco (y sólo 144.000 de ellos lo hacen, de momento, en universidades privadas), siendo la comunidad que recibe más estudiantes de fuera de ella. No logró generalizar el recorte presupuestario,⁴⁷ pero mantiene la presión iniciada al mermarse el convenio sobre financiación que debería alcanzar al 2010 (a la UCM se le retiró el 30% de los gastos corrientes y el 50% de la inversión).⁴⁸

Además, el gobierno regional de Madrid anuncia lo que llama «cheque a las familias», para que los estudiantes elijan la universidad, pública o privada, que deseen para el posgrado. Si eligen la segunda opción, se reducirán los fondos a las públicas madrileñas. El 27 de noviembre de 2008 los seis rectores de éstas, a través de la Conferencia que las une (CRUMA) y reunidos en el Círculo de Bellas Artes, anunciaron que se manifestarían días después frente a la Consejería de

47 Posturas de otras comunidades respecto a incrementos presupuestarios, en *El País*, 13-X-2008, 32.

48 El presupuesto de la CAM para 2009, en su capítulo 518 («Universidades»), ya preveía una reducción del 4,35%. Las inversiones bajarían así de 120 a 64 millones de euros, eludiendo abonar el incremento aprobado por el gobierno en 2004, relativo a pagas extraordinarias. La UCM tomó medidas de excepción, como bloquear los expedientes de gasto en fase de retención o autorización, la revisión de ejecución de contratos «comprometidos», la paralización de las convocatorias de becas y ayudas con cargo a fondos propios, la retención de un 40% del crédito disponible en todas las unidades de gasto y de un 50% de los saldos a incorporar como remanente de las actividades científicas realizadas desde la propia universidad. A ello se sumó la limitación de horas extraordinarias al personal administrativo, y la reducción del importe de conferencias y gratificaciones.

Educación.⁴⁹ Los sindicatos se sumaron y dieron un contenido anti-privatizador a la convocatoria. Pero el día de la manifestación, 10 de diciembre, sólo acudió un rector, el de la UCM.

Todavía recientemente el Secretario de Estado de Investigación, Carlos Martínez, reconoció —en el foro «España innova»— que las universidades españolas están «financiadas por debajo de sus posibilidades», incluso por debajo de la media de la OCDE y la Europa de los 15. Alertó de la necesidad de activar la competencia interna y la competitividad entre centros para allegar recursos.⁵⁰ Pero a pesar del malestar, no existe un verdadero debate ni siquiera acerca de cómo realizar reforma de los estudios «a coste cero»,⁵¹ en tanto que las privadas aprovechan el marco legal liberalizador no ya, evidentemente, para crear infraestructuras de investigación, sino para poner en marcha títulos que, de momento, tienen acogida. Las diferencias entre comunidades, no sólo en este plano de la competición entre pública y privada, sino en general, son grandes, en ritmo e intensidad. Aunque la información no es completa ni del todo segura —faltan datos oficiales, o los que hay oscilan y se contradicen—, la Comunidad más avanzada en implantación de títulos es Cataluña, que a mediados de marzo tenía ya en marcha 31 de los 333 títulos de grado que quiere crear. Para 2010 cuenta con haber adaptado un 75% del total.⁵²

La letra de la ley considera que del incremento del esfuerzo investigador se derivará la mayor competencia y relevancia de las universidades públicas. El esfuerzo individual y colectivo que se les exige a las privadas es mucho menor, pero eso no parece deteriorar por el momento la buena imagen de que en general gozan estos establecimientos entre muchos de los estudiantes y sus familias, en especial en los ámbitos

49 El Consejero de Hacienda, Beteta, había negado que el monto total de la deuda que los rectores reclamaban ascendiera, como ellos decían, a 223 millones de euros. Pero no aportaba pruebas.

50 El boletín del foro, en <foronuevaeconomia.com>.

51 El ministerio negó que fuera así, objetando haber destinado, entre 2008 y 2009, 40 millones de euros a «acciones ligadas al EEES, como el cambio de los títulos de escuela universitaria o la innovación docente» (Marius Rubiralta en *El País*, 12-I-2009, 30).

52 En declaraciones de 18 de marzo, la Comisionada de Universidades catalana, Blanca Palmada, afirmaba que de las 535 titulaciones que ofrecerían las doce universidades catalanas, 333 se adaptarían en esa fecha a Bolonia, y otras 188 se prolongarían todavía por unos años (*Público*, 19-III-2009, 31).

regionales en los que no coinciden el signo partidario del gobierno de la nación y el del gobierno regional. La mayoría de las universidades privadas, como es sabido, tienen que ver con instituciones religiosas y, por otra parte, no cuentan con un profesorado de cualificación similar a la universidad pública, en general. Ni mucho menos, salvo excepciones que ya son de raigambre —por venir de las primeras privadas, y no de esta floración última—, con investigadores propiamente.

Respecto al futuro previsto para el profesorado, la Dirección General de Universidades empezó a circular a principios de 2009 un primer borrador de Estatuto para el Personal Docente e Investigador, tarea aplazada desde 2004 y que se centra en el funcionariado —aunque la LOU (2001) y su reforma, la LOMLOU (2007) contemplan asimismo la vía laboral, y que por el momento no interesa—.⁵³ En Madrid, a comienzos de 2009, había algo más de 17.000 profesores universitarios (unos 6.000 sólo en la UCM). Con críticas de los sindicatos⁵⁴ y reticencias de alguna Comunidad,⁵⁵ apenas nadie más que algún decano ha discutido el borrador, parte de la *Estrategia Universidad 2015*, proyecto estrella que fue presentado como «un gran pacto social por la educación superior» entre la Administración general del Estado, las administraciones autonómicas, las universidades,

53 Sólo al principio de la implantación, LOU pareció tomarse en serio la contratación laboral de una manera digna.

54 Desde diciembre de 2008, CC. OO. lamenta sobre todo el reconocimiento del contrato de obra o servicio para contrataciones esporádicas o sustituciones (imposibles de cubrir hoy con agilidad, por la inflexibilidad de la ley), y la potenciación de la investigación en el marco de la carrera profesional de los docentes y sus retribuciones (no especificadas sin embargo de manera concreta, puesto que la atribución de incentivos depende en buena parte de la administración local). Se protesta también contra el exceso del celo evaluador que, poco a poco, se va adueñando de él día a día. Por su parte, las hojas volantes e informes de UGT insisten en la pérdida de poder adquisitivo del profesorado y en que, si las condiciones del borrador se cumplen, muchos profesores universitarios tendremos cuatro tipos de evaluación diferente, acumuladas y no sustituibles entre sí (al año para el complemento autonómico, cada quinquenio —por dos conceptos diferentes, la docencia y la evaluación «global», y para la investigación cada seis años, como viene sucediendo hasta aquí).

55 De nuevo es el gobierno regional de Madrid uno de los menos proclives a sostener el coste de la universidad pública. A pesar de firmar un convenio colectivo para el personal docente laboral de las seis públicas del distrito en septiembre de 2008, la Dirección General se negó a cumplirlo después. A finales de febrero de 2009 los sindicatos esperaban aún que la CRUMA, presidida a la sazón por el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, les ayudara a presionar.

los agentes sociales y económicos y la sociedad en general, «para afrontar los retos de la globalización». Su apuesta por la transferencia de tecnología (idea matriz en el MICINN), debería garantizar «que el sistema universitario español en su conjunto siga avanzando hacia la excelencia y se consolide en el contexto internacional», pero la crisis ha acallado la euforia, arrastrando con ella de momento los «campus de excelencia».⁵⁶ Por otro lado, parece ir cuajando la rendición de cuentas, obligación que las universidades escamoteaban con facilidad hasta hace poco, y cuyo cumplimiento partió de la Conferencia de Rectores. La complejidad de la situación se resume en unos pocos párrafos, aún por desarrollar.⁵⁷

Y en fin, ahí está la preocupación del Gobierno por fomentar la igualdad de género a través de diversas medidas para favorecer la feminización de la universidad y los ámbitos científicos: Andalucía, la comunidad más avanzada en legislación, apuesta por una participación de las mujeres en los órganos de gestión y dirección de la universidad no inferior a un 40%, y recomienda no bajar el listón del 20% de mujeres en el acceso a cátedras.

56 La «Estrategia», que pretende situar a España entre los 10 países más avanzados en educación superior para esa fecha, habla de esas «instituciones que, compartiendo el mismo campus, elaboren un proyecto estratégico común con el fin de crear un entorno académico, científico, emprendedor e innovador dirigido a obtener una alta visibilidad internacional». Era presentada en la UPV/EHU, por el ministerio y el rector del País Vasco, el 12 de marzo de 2009. Hasta ese momento, la presentación había tenido lugar en Santiago, 23 de octubre de 2008; Alicante, 28; Oviedo, 5 de noviembre; Pompeu Fabra, 17; Vigo, 21; Salamanca, 26 de noviembre; Extremadura, 18 de diciembre; Pablo de Olavide (Sevilla), 8 de enero de 2009; Universidad de Valencia y Politécnica de Valencia, 12; Burgos, 15; Murcia, 22; Deusto, 27; Pontificia de Salamanca, 12 de febrero; Tarragona, 16; Zaragoza, 9 de marzo (extractos del discurso del secretario de Estado Marius Rubiralta, el 12-III-2009, en <www.micinn.es>).

57 El *Compromiso con la Promoción docente e investigadora de las Humanidades y Ciencias Sociales*, por ejemplo, asegura que el Gobierno «es consciente que [sic] el proceso de adaptación al EEE y el desarrollo de la Ley Orgánica de Educación (LOE), en relación al máster de secundaria, ha dado lugar a una situación de preocupación general en docentes y estudiantes. Además, algunos mensajes equívocos en relación a las prioridades de la investigación, así como acerca de la eficiencia económica de las titulaciones, han aumentado el nivel de confusión. Por ello, dado que estos ámbitos de conocimiento constituyen la esencia del Sistema Universitario Europeo, y por ello de nuestro modelo de universidad, el Gobierno de España está dispuesto a impulsar actuaciones específicas de promoción de sus actividades docentes e investigadoras, así como a resolver cuestiones que afectan a las evaluaciones de profesorado y proyectos. Por

Cambio científico e investigación

La investigación realizada en las universidades sigue creciendo en términos globales, al tiempo que se incrementa la sensibilidad positiva del profesorado hacia las tareas científicas, aunque ello no sin tensiones.⁵⁸ En tanto que una parte del profesorado más veterano, con algún respaldo sindical,⁵⁹ echa de menos una mayor potenciación y consideración de la docencia, muchos entre los pocos jóvenes que acceden al profesorado universitario —insuficientes en número como para renovar los cuadros— muestran tendencia a menospreciar la calidad de las tareas docentes frente al cultivo de la investigación. La cual se valora en la promoción —esto se dice con frecuencia, aunque tampoco haya razón siempre para creerlo— más que la docencia.⁶⁰

En cuanto a la financiación de la investigación, es de notar la escasa participación global, en proporción, de los investigadores españoles en los proyectos europeos. En ciertos casos, puede entenderse que determinados colectivos se bastan con la financiación nacional y autonómica (siendo esto aplicable a muchos grupos de ciencias sociales y

todo ello el MICINN convocará una comisión de análisis formada por especialistas de las áreas afectadas para elaborar un Plan de Apoyo en el marco de la Estrategia Universidad 2015».

- 58 Los incentivos por investigación, y otras medidas, han incidido positivamente. Entre 1989 y 2005 contaba con todos los «sexenios» posibles un 47% del total del profesorado, siendo 25% quienes los poseían parcialmente. Un 28% habían sido rechazados o no se habían presentado a la convocatoria anual de la CNEAI. Los más altos porcentajes de éxito estaban en las universidades Carlos III de Madrid, Jaime I de Castellón, Pompeu Fabra de Barcelona, y Pablo de Olavide de Sevilla.
- 59 Comisiones Obreras interpuso recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con el llamado «complemento retributivo», concepto de incentivos por méritos individuales que desarrolla el mandato LOU de potenciar la investigación por el profesorado universitario y que, en su componente variable, premia sobre todo la dirección de proyectos de investigación financiados. El esfuerzo sindical fue dirigido a equiparar la docencia —pues sólo la mitad del total de PDI universitario tiene derecho a ese complemento en función de los criterios adoptados—, pero el TSJM, a principios de 2009, le dio la razón al gobierno de la presidenta Aguirre. Cada comunidad ha desarrollado ese complemento de manera diversa.
- 60 La *Hoja del Lunes* 454, de 18-XII-2008 de CC. OO. concluye: «La situación de la Universidad española es complicada en estos momentos, y no es deseable que converjan más factores, pero desde CC. OO. no se va a admitir que se modifiquen a peor las condiciones del PDI». En junio de 2009 sigue sin aprobarse el Estatuto y sin aclararse los extremos sobre los que hubo objeción.

humanidades). Pero también hay que hacer notar las continuas quejas de los científicos por la excesiva burocratización del proceso de solicitud de fondos y las dificultades que suscita la gestión de los mismos: falta de infraestructuras para la gestión de proyectos, e infinitos inconvenientes y trabas que es preciso sortear. Las quejas afectan asimismo a los retrasos en las convocatorias, que tienden a reaparecer, así como a la poco clara actitud del ministerio acerca de la financiación de excelencia.⁶¹ No es fácil realmente pasar *del cemento al conocimiento*. Con todo, el «compromiso número 10» de la estrategia del Gobierno para los próximos cinco años hablaba de implicarse en «la mejora en las condiciones de vida personal y laboral de la comunidad universitaria y de sus entornos, como acción de mejora de la calidad del servicio público que prestan las universidades». Con el objetivo de fomentar campus de excelencia, hoy aparcado por la crisis, se aspiraba a «crear verdaderos entornos de vida universitaria integrada socialmente al distrito urbano o territorio, con gran calidad y altas prestaciones de servicios y mejoras en sostenibilidad medioambiental». También, atraer a los mejores estudiantes e investigadores, favoreciendo «la competencia por ubicar instalaciones científicas y empresas de alto valor añadido». A esta hora, ninguna de esas ideas ha comenzado a despegar. Y no se ha vuelto a preguntar por la cuantía precisa del fondo extraordinario para universidades que, al decir del Gobierno, se había incluido en el «Plan E» (Plan Español de Estímulo de la Economía y el Empleo) en noviembre del 2008.⁶² Se habló entonces, imprecisamente, de unos 200 millones con destino a las universidades y otros 150 (2008) y 219

61 En noviembre de 2008, el Gobierno anunciaba la congelación de los dos programas estrella de fomento de la investigación: el «Consolider» (grupos y proyectos de excelencia científica) y el «Cénit» (grandes proyectos de I+D de cooperación pública y privada). Pero, para el primero, el 19 de enero de 2009 el MICINN daba marcha atrás, e incluso incrementaba algo el presupuesto anterior (15 millones de euros) para nuevas concesiones. En cualquier caso, el monto total es bajo, pues se trata sólo de una docena de nuevos proyectos por año, a sumarse a los anteriores en vigor (57 en total, por el momento). En cuanto a Cénit, rescatado también, se anunciaba la mayor dotación presupuestaria hasta ahora nunca habida por ese concepto: casi 200 millones de euros.

62 490 millones iban destinados a nuevas convocatorias de I+D, distintas de las existentes y complementarias, que todavía no han aparecido. Con ello el presupuesto del MICINN para 2009 se incrementaba un 10% respecto al del año anterior, llegando a los 7.747 millones de euros. Sin embargo, ha sido el ministerio más afectado por los recortes presupuestarios de urgencia, a partir de abril.

(2009), con destino a esos *campus de excelencia* que hoy vuelven a aparentar irrealidad.

En medio de la pasión legisladora que suele caracterizar a la vida política española, el MICINN anunciaba a principios del 2009 que iba a reorganizar la investigación en tres áreas, en recolocación taxonómica de los OPIs, «organismos públicos de investigación». Garmendia buscaba entonces «la forma jurídica» para agruparlos en tres grupos: ciencias de la vida, ciencias de la materia (matemáticas, física, información y comunicación, ingeniería y ciencias del universo y de la tierra) y ciencias sociales. Del presupuesto de su ministerio para este año (6.730 millones de euros), el Plan Nacional de I+D+i se llevaba algo más de 3.000, reservándose sólo para becas 844,3 millones, con una única subida significativa, en el programa Erasmus, que llegaba a los 66 millones de euros tras incrementarse el 10%. Las becas Séneca, de movilidad interior, apenas suben por el contrario un 1%. La crisis ha afectado fuertemente a ese presupuesto, hallándose aún en curso las modificaciones de todo orden que supone el nuevo reparto de tareas, desde abril, con el reconstruido MEC. En el otro extremo, la escuela de negocios de la Universidad de Navarra —presente en nueve países de cuatro continentes— ha seguido impartiendo cursos para directivos a lo largo del último semestre, en todos esos países, a pesar de la crisis mundial (*El Mundo*, 26-X-2008, 43).

Sigue esperando una *Ley de la Ciencia* que, en borrador, creaba una Agencia Estatal de Financiación para investigación básica y aplicada, asumiendo también competencias en evaluación. En ese mismo borrador, se apuesta por la contratación laboral de los científicos en organismos públicos de investigación, si bien ello parece referirse únicamente a los no vinculados a universidades, principalmente CSIC, aunque no sólo. Es novedad una fórmula suave de *tenure track*, a partir de un contrato de cinco años con evaluación al término, y después contrato indefinido. Se movilizaron frente al borrador colectivos como la Federación de Jóvenes Investigadores, becarios no contentos con una consideración de carrera investigadora que arranca de la defensa de la tesis doctoral, sin que quedaran satisfechos tampoco los contratados del Programa «Ramón y Cajal» —jóvenes científicos recuperados para los organismos públicos de investigación tras una formación solvente en el extranjero, y cuya estabilización depende, de momento, de que hayan sido revalidados mediante *acreditación* (laboral o funcional) y, a partir de

ésta, concurso público—. Por otra parte, adaptando una regulación existente (mas apenas practicada), también se prevé la contratación de extranjeros y figuras de prestigio, con contratos similares a los de alta dirección en el sector privado y, por vez primera, la posibilidad de pedir excedencia para trabajar en empresas privadas durante un plazo máximo de cinco años. Presentado a los medios el borrador a mediados de febrero, se pasó a discusión con comunidades autónomas, sindicatos y Administración central (Hacienda y función pública, sobre todo) antes de ir al parlamento, a donde todavía no llegó. En caso de aprobarse, sustituirá a la ley de 1986, también socialista.

Otros puntos interesantes de la nueva ley (entre los más próximos a la filosofía del MICINN, y por ello controvertidos) son la vinculación de la investigación al sector privado mediante participación en sociedades mercantiles, la reestructuración del Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) para encargarse de financiar el desarrollo experimental, y la creación de un comité de Ética. En estos momentos, es difícil prever cuál será la aplicación práctica de muchas de esas medidas —si es que finalmente pasan del papel—, toda vez que el diseño constitucional delega la política educativa en las CCAA y son muy pocas las competencias que se reserva el Estado. En este sentido, cabe aún recordar que si bien el gasto en educación superior se incrementó notablemente desde el arranque del milenio, el gasto por universidad comenzó ahí mismo a ser menor por culpa de la proliferación de universidades. Corregir ese fallo va a ser difícil en los próximos años, pues ni siquiera una *verdadera* autonomía universitaria (es decir, el control de recursos, el cumplimiento de objetivos y el rendimiento de cuentas, todo ello en correspondencia interna) es aplicable, en la medida en que los rectores —elegidos por sufragio universal— se encuentran obligados a satisfacer intereses y obligaciones bien distintas y a acudir a frentes de contradictoria entidad. Entre las universidades que mejor parecen haber comprendido el reto están, con todo, las politécnicas.

En otros muchos aspectos de la vida académica, faltan motivos para el optimismo. Si bien la fijación de los estudiantes a las universidades de su distrito es más que una tendencia temporal (no es fácil crear cultura de la movilidad de la noche a la mañana, y con pocas becas, una vez que se ha fomentado hasta aquí por motivos políticos la creación de universidades, no ya sólo en ciudades muy próximas sino incluso en distritos contiguos, y sin contemplar una redistribución de

la oferta de títulos), hay que tener en cuenta que los propios problemas del profesorado van a lastrar la transformación. La Universidad de Cantabria ha publicado un *Atlas de la España universitaria* que ofrece datos de todo tipo, diferenciados por cada campus, todos ellos inscritos sin embargo en un marco poco tranquilizador: las universidades más jóvenes, con profesorado menos envejecido que el resto, no son competitivas de momento; las más antiguas y más grandes como la UCM, por el contrario, están interrumpiendo la renovación de las plantillas, a pesar de ser algo perentorio, por razones de tipo económico y en la imposibilidad de saber realmente, con el retraso que llevan los planes, cuál será el horizonte a medio plazo.

Queda asimismo por mencionar la consabida endogamia. Dos tercios de los profesores titulares de universidad, a la altura del verano de 2006, habían obtenido su plaza como único aspirante (no ya sólo presencial, sino en cuanto a la firma de convocatoria). La situación es producto, salvo excepciones, de la forma en que las autonomías han ido modelando sus universidades como empresa —no dispuestas a arriesgar ni a incrementar ocasionalmente costes de personal—, así como de la forma clientelar y (falsamente) «de escuela» que sigue teniendo, en buena medida, la reproducción académica en España. A un observador que sólo tuviera en cuenta la letra de la ley, no obstante, podría parecerle que algo ha empezado a cambiar, porque la selección de candidatos, tanto en su fase de acceso como de promoción —y tanto para las figuras contractuales como de función pública— se acomoda ahora a una *Acreditación* previa, que concede la Agencia Estatal para la Calidad y la Acreditación siguiendo instrucciones del Consejo de Universidades, en que la fuerza principal la constituyen los rectores, tanto de las universidades públicas como de las privadas. Este sistema, decidido por el PSOE, vino a sustituir a fines de 2006 a la denostada *Habilitación*, siendo un procedimiento de cualificación «de mínimos», que sin embargo en la práctica está conduciendo no a la competición entre acreditados, como pretendía el decreto que lo regula, sino al contrario, a la obtención individualizada de una plaza por candidato —más tarde o más temprano—, en la que se tiende a que el propio candidato (por ese concepto de empresa fuertemente sindicalizada que se exhibe) pase a tomar parte decisiva en la designación del tribunal que lo ha de consolidar. Junto a esta transformación, sustantiva y apenas discutida, otra consecuencia grande de los procesos de acreditación es, de modo

paradójico, la menos visible o aparente: en virtud de lo dispuesto en la LOU (de 21 de diciembre de 2001, bajo el PP), sólo ejecutado por la LOMLOU (de 12 de abril de 2007, con el PSOE), la Conferencia General de Política Universitaria acordaba, el 3 de septiembre de 2008, el reparto territorial del crédito necesario para la incorporación casi automática como Titular —mediante cumplimiento de requisitos mínimos que, obviamente, incluyen el título de doctor— de los casi 11.000 profesores llamados «de Escuela Universitaria». Para el ejercicio económico de 2008, el coste de la transformación fue de unos 4,5 millones de euros.

Bibliografía

- ANECA (2007): *Informe sobre el estado de la evaluación de la calidad en las universidades españolas*, Madrid, 2 de diciembre.
- HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena (2008): «Tres décadas de educación superior en España: universidades e investigación», en: *Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad*, vol. 11, núm. 1, 101-134.
- MOLINA, Cristóbal/ÁLVAREZ, Manuel/OJEDA, Antonio (2003): *Ordenación y gestión del personal docente e investigador contratado: problemas y soluciones*. Jaén: Universidad de Jaén.